

CHILE 97

~~CHILE - 1997~~

ANÁLISIS Y OPINIONES

Nueva Serie Flacso

Chile 97. Análisis y opiniones

Las opiniones que los trabajos presentan, así como los análisis e interpretaciones que en ellos se contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de FLACSO ni de las instituciones a las cuales se encuentran vinculados.

302
FSA 26
1022

Ninguna parte de este libro/documento, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, transmitida o almacenada de manera alguna ni por algún medio, ya sea electrónico, mecánico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin autorización de FLACSO.

La publicación de este libro, que recoge parte de las actividades de FLACSO ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Ford, The William and Flora Hewlett Foundation y la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur, a través del apoyo a los diversos programas de la Institución.

322(83) FLACSO-Chile
F572 Chile 97. Análisis y opiniones. Santiago, Chile:
FLACSO-Chile, 1998
420p. Nueva Serie FLACSO
ISBN: 956-205-117-X

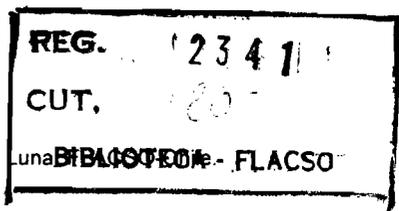
1. POLITICA SOCIAL
2. POLITICAS PUBLICAS
3. POLITICA EXTERIOR
4. DESCENTRALIZACION
5. INTEGRACION ECONOMICA
6. PARTICIPACION CIUDADANA
7. RELACIONES CIVICO MILITARES
8. MUJERES
9. JUVENTUD
10. POLITICA CULTURAL
11. CHILE

© 1998, FLACSO-Chile. Inscripción N°105.006. Prohibida su reproducción.
Editado por FLACSO-Chile, Leopoldo Urrutia 1950, Ñuñoa
Teléfonos: (562) 225 7357 - 225 9938 - 225 9655 Fax: (562) 225 4687

Casilla electrónica: flacso@flacso.cl

FLACSO-Chile en Internet: <http://www.flacso.cl>

Producción editorial: Marisa Weinstein
Diagramación interior: Claudia Gutiérrez y Antonieta
Diseño portada: Osvaldo Aguiló
Impresión: AGD Impresores



INDICE

Presentación

<i>Francisco Rojas Aravena</i>	5
--------------------------------------	---

AMERICA LATINA

Condiciones de gobernabilidad democrática en América Latina

<i>Norbert Lechner</i>	9
------------------------------	---

América Latina en 1997

<i>Gabriel Gaspar</i>	25
-----------------------------	----

Visiones latinoamericanas sobre economía y democracia

<i>Marta Lagos</i>	41
--------------------------	----

POLITICA

Tendencias de participación electoral en Chile en 1997

<i>Patricio Navia</i>	61
-----------------------------	----

Aproximaciones a la participación ciudadana

<i>Marcela Noé, Patricia Correa, Soledad Jaña, Luis Vial</i>	87
--	----

Las mujeres en 1997: ciudadanía e invisibilidad

<i>Teresa Valdés</i>	103
----------------------------	-----

Relaciones civil-militares en 1997: otro hito en el complejo proceso de normalización

<i>José Luis Díaz</i>	127
-----------------------------	-----

ECONOMIA

La economía chilena en 1997

<i>Oscar Muñoz</i>	139
--------------------------	-----

RELACIONES EXTERIORES

La política exterior chilena en el 97: los desafíos en la reinsertión

<i>Paz Milet</i>	161
------------------------	-----

Reunión PECC en Chile

<i>Andrés Angulo</i>	169
----------------------------	-----

PROCESOS DE INTEGRACION

Integración hemisférica, EE.UU. y MERCOSUR: el escenario actual visto desde Chile	
<i>Alicia Frohmann</i>	179
Chile y Argentina: hacia una política de complementación binacional y subregional	
<i>Francisco Rojas Aravena</i>	189
Construyendo confianza: las relaciones chileno- argentino durante 1997	
<i>Carlos Martin y Beatriz Calderón</i>	213

POLITICAS SOCIALES

FOSIS: políticas sociales y sus perspectivas	
<i>Sergio Gómez</i>	241
El proceso de cambio curricular en la educación media	
<i>Cristián Cox</i>	259

JOVENES

Los jóvenes de sectores populares: nuevas preguntas de investigación	
<i>José Olavarría, Cristina Benavente y Patricio Mellado</i>	287
Crisis, conflictos y soluciones parciales en las universidades chilenas	
<i>Manuel Antonio Garretón</i>	325
Jóvenes universitarios en los noventa: la visión de los dirigentes estudiantiles	
<i>Marcela Pérez de Arce</i>	339

CULTURA Y COMUNICACIONES

La industria de las comunicaciones y el mercado de mensajes durante 1997	
<i>José Joaquín Brunner</i>	361
Los evangélicos en Chile hacia el año 2000	
<i>José Miguel Sandoval, Juan Allende y Hugo Castillo</i>	391
Información televisiva y opinión pública en 1997	
<i>Giselle Munizaga</i>	413
Autores	420

Crisis, conflictos y soluciones parciales en las universidades chilenas¹

Manuel Antonio Garretón M.

A mediados de 1997 estallaron conflictos en las universidades estatales, originados básicamente por la FECH y el conjunto del movimiento estudiantil. Iniciado con una petición de renuncia del Rector de la Universidad de Chile, siguieron tomas de locales y movilizaciones que involucraron también al gobierno y culminaron en un acuerdo entre autoridad académica y estudiantes que establecía un sistema de discusión tri-estamental del proyecto de universidad y sus estatutos y un referéndum sobre las opciones en debate.

Más allá de las declaraciones y discursos, movilizaciones y medidas reactivas que caracterizaron la situación por la que pasaron las universidades chilenas en 1997, se hace necesario un análisis de su significado que acepte su complejidad y multidimensionalidad, no siempre presente en las percepciones de sus propios protagonistas. Como todo análisis, lo que proponemos es discutible y refutable. Al menos, intenta desarrollar una perspectiva, desde un ángulo sociológico, que no se identifique globalmente con ninguna de las posiciones en conflicto, permitiendo ordenar y clarificar los diversos elementos en juego, precisamente para facilitar tomas de posiciones que no pueden sino también ser complejas y polivalentes.

1 Este artículo es una versión revisada y actualizada del publicado en El Mercurio, Suplemento Artes y Letras, 29 de Junio de 1997, con el título "Las tres dimensiones del conflicto universitario".

A nuestro juicio, en la crisis y conflicto de las Universidades que estallaron a mediados de 1997, hay al menos tres dimensiones que se combinan y que no pueden reducirse una a otra. La primera se refiere a la crisis de la Universidad y la educación superior, la que a su vez tiene una dimensión epocal universal y otra nacional que se superponen y que trataremos por separado. La segunda tiene que ver con el carácter de los problemas y conflictos socio-políticos en nuestro país. La tercera tiene que ver con la dinámica propia del conflicto universitario y los rasgos específicos de sus protagonistas, especialmente del movimiento estudiantil.

La problemática epocal de la universidad

La sensación que emerge de las declaraciones y propuestas en torno al conflicto universitario, es que sus diferentes actores y protagonistas se han movido con un concepto de Universidad que corresponde a otra época u otro tipo de sociedad. Es decir, no se ha hecho la refundamentación o refundación de la idea de Universidad para la sociedad contemporánea.

Las sociedades históricas que conocemos no son más la expresión, factual o referencial, de algún tipo único de Sociedad Industrial de Estado Nacional, sino que se combina con éste, en una creación nueva para cada país concreto, la Sociedad Post-industrial Globalizada. Al primer tipo societal correspondían ciertas instituciones, entre ellas las educativas donde se inscribe la Universidad, como un espacio único en que coinciden la transmisión de una herencia cultural universal y local, la producción de conocimientos y la formación de las generaciones jóvenes tanto en sus dimensiones general como profesional. Del mismo modo que el concepto de trabajo y producción y la organización de éstos está cambiando radicalmente en relación a la sociedad industrial (piénsese en la robótica, la informática, las nuevas forma de comunicación, etc), o que el concepto de política cambia por efectos de la transformación de los Estados y la explosión a la vez de la globalización y de las identidades particularistas en todas partes del mundo, o que la sociedad deja de estar organizada solo en torno a grandes clases sociales definidas en la producción o en el control de recursos estatales o que la modernidad aparece

diversificada en diversos modelos de socio-culturales y deja de identificarse con un tipo particular de modernización, cabe pensar en la profunda transformación de las instituciones culturales, educativas y científicas.

En otras palabras, en la medida que las sociedades contemporáneas dejan de definirse por la correspondencia, aunque fuera contradictoria, entre una forma de producción o economía, de organización social y política y una dimensión cultural, que caracterizó al tipo societal nacional industrial, las instituciones que asumían en el nivel educativo y cultural tal correspondencia, no pueden ser las mismas. Hoy ya no puede identificarse, exclusivamente, las juventudes universitarias cada vez más amplias, heterogéneas y diversificadas con un modelo de movilidad social o una elite dirigente, ni la enseñanza profesional con el desempeño ocupacional, ni la producción y difusión de conocimientos o la elaboración y debates de ideas con la organización propia de las Universidades.

En este sentido, la Universidad, tal cual la conocemos, distinta de la medieval por ejemplo, es una institución histórica propia de los Estados nacionales de sociedad industrial, es decir, de un tipo de sociedad que ya ha dejado de ser el único. Las prácticas, ritos, instituciones, normas y formas organizativas de las universidades son herencia de ese tipo societal y eso es lo que las hace ver muchas veces como "jurásicas" y dispensables. No soy de los que piensan que la Universidad va a desaparecer como institución y creo en su indispensabilidad hoy y mañana, pero creo también que la Universidad del futuro, y su centralidad en las sociedades, será muy distinta de la que conocemos, aunque no sepamos cómo será. Y en este sentido, las sociedades históricas no han pensado ni desarrollado aun el tipo de institución universitaria que corresponderá a la combinación del tipo societal industrial nacional con el post industrial globalizado. Es decir, no se ha refundado la Universidad y ella, en todas partes del mundo parece ser un símbolo clásico de una sociedad que desaparece más que una institución del futuro.

En síntesis, hay una problemática universal de refundación de la idea de Universidad y de discusión de su centralidad en la sociedad, que está detrás del malestar y los conflictos actuales. Y este debate no se ha hecho en nuestro medio y también ha estado ausente del conflicto vivido en 1997.

La crisis del sistema de educación superior y las universidades chilenas

Sobre este trasfondo, de carácter más o menos universal pero que tiene sus implicancias en cada situación histórica, es que hay que ubicar la especificidad de la crisis del sistema de educación superior y universitaria en Chile, que afecta a mi juicio a todos sus componentes, estén o no involucrados en los conflictos inmediatos.

Recordemos que el sistema de educación superior y universitario chileno sufrió una profunda transformación a comienzos de los ochenta bajo el régimen militar. Los principios que presidían tal transformación eran, por un lado, la diversificación del sistema creando tres niveles (Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica). Por otro lado, la generación de un nuevo ámbito de Universidades privadas y, finalmente, el concepto de auto financiamiento y de predominio de mecanismos de mercado en el conjunto del sistema. Sin detenernos en las intenciones que guiaban esta transformación, ni en el detalle de las medidas y modalidades con que fue implantado el modelo, cabe evaluar sus efectos y resultados al terminar el régimen militar. Hay que reconocer, en el lado positivo, la expansión de la oferta en educación superior y la oportunidad de creación de algunas Universidades particulares de cierta calidad y potencialidad. Pero, en general, los efectos de este modelo fueron básicamente perversos y, en vez de solucionar alguna crisis de arrastre, la profundizaron y generaron nuevas crisis.

Así, a comienzos de los noventa se tenía un sistema inorgánico y anárquico con una expansión desmesurada de Universidades privadas y carreras sin bases serias de desarrollo, con pésimos mecanismos de control y evaluación, con componentes mal definidos y aprisionados en una visión de libre mercado estrecha y sin relación entre ellos, como lo que ocurría con los Centros de Formación Técnica y los Institutos Profesionales o con la definición arbitraria de algunas carreras como propiamente universitarias. A su vez, se había producido una segmentación socio-económica que a la vez elitizaba y marginalizaba, con Universidades regionales cuya interesante potencialidad se frustraba por el abandono estatal, con una profunda desarticulación y debilitamiento de las universidades estatales, especialmente de la Universidad de Chile y una política normativa y de recursos que favorecía arbitrariamen-

te a la Universidad Católica. Si los principio autoritarios, de mercado y autofinanciamiento, no le sirvieron al régimen militar para generar un sistema universitario nuevo, sí le sirvieron para destruir el antiguo, sin resolver sus problemas.

Las autoridades democráticas del Estado se encontraron en 1990 un sistema de educación superior al mismo tiempo en pleno auge y descomposición. Frente a ello, sólo buscaron, por razones que no cabe analizar aquí, resolver sus problemas políticos (básicamente, elección de autoridades en reemplazo del sistema autoritario de designación) y económicos (corrección de los criterios de entrega de recursos a las Universidades estatales, principalmente). En años posteriores se agregaron políticas de crédito fiscal para estudiantes, aumento de recursos para las instituciones estatales y más adecuados, aunque siempre insuficientes, perfeccionamiento de mecanismos de acreditación y control de las nuevas instituciones del sistema. Nadie podría negar que hubo muchas políticas y medidas, tanto de las autoridades de gobierno como de las propias universidades, destinadas a resolver problemas y mejorar la situación del sector. Sería absolutamente injusto decir que las instituciones, especialmente las estatales, están en la misma situación de vida académica que bajo el régimen militar. Los indicadores que acostumbra a mostrar ambos tipos de autoridades así lo muestran, aunque muchas veces en un diálogo de sordos tales indicadores oculten otros aspectos críticos. Pero, en esencia, el sistema permaneció intocado y no se le evaluó ni modificó a partir de un debate que diera origen a conceptos nuevos y a un verdadero consenso nacional, sobre el sentido, estructura y desarrollo del sistema de educación superior y las Universidades. Lo que se hizo para el tema de los equilibrios macro-económicos, derechos humanos, pobreza y otros niveles de la educación, no se hizo con la educación superior ni las Universidades. En este sentido, las medidas y políticas correctivas y reactivas tanto a nivel de Estado como de cada institución, no se enmarcaron en una verdadera política nacional, por un lado, y propia a cada Universidad, por otro, lo que las hizo necesariamente incoherentes y carentes de horizonte.

Más grave aún, si hubo algún concepto al respecto, éste fue reafirmador del modelo heredado. En efecto, se habló de un "sistema suficientemente diversificado y desarrollado" que había

que "consolidar" y en ningún caso reformar (curiosamente, por ejemplo, al mismo tiempo el Estado perdía sus únicos Institutos Profesionales que se transformaban en Universidades) y que lo que había que hacer era permitir la "autorregulación del sistema". Tanto el diagnóstico como la visión de política eran tan profundamente equivocados que, pese a lo que se afirmó en un momento, no hubo ningún consenso que permitiera ni reformar el marco normativo del sistema ni consolidarlo. Con lo que se dejó vigente el marco heredado del régimen militar, y, por lo tanto, sus principios rectores, con los efectos ya señalados, introduciéndose sólo algunas políticas paliativas.

Por su parte, las autoridades universitarias elegidas, carentes también de un concepto claro de largo plazo, enfrentaron los problemas más urgentes y las crisis inmediatas de recursos y de formas de gobierno con el mismo marco normativo heredado. Es indudable que en algunos casos, hubo acciones y políticas exitosas. Que haya unidades y actividades académicas de alta calidad es una prueba de ello, pero lo inadecuado del sistema hace que la calidad académica general se resienta y afecte prácticamente a todos sus componentes. En este sentido, no hay ninguna institución que esté exenta de una crisis actual o potencial, aunque ella pueda retardarse por la existencia de recursos u ocultarse por el autoritarismo de su sistema de gobierno.

Así, en la crisis del sistema de educación superior y de las Universidades chilenas confluyen tres elementos. En primer lugar, la presencia de conceptos, mecanismos y marco normativo heredados del modelo del régimen militar. En segundo lugar, la ausencia de un concepto alternativo por parte del Estado y de los gobiernos democráticos que funde una nueva institucionalidad y una política coherente, en aquello que les corresponde, respecto del sistema de educación superior y su financiamiento. En tercer lugar, las políticas parciales y reactivas de las autoridades y comunidades académicas, en la que recaen responsabilidades diferenciales de todos los estamentos: docente, estudiantil y administrativo.

El contexto socio-político

No puede entenderse el significado y formas del conflicto universitario desatado en 1997, si no se le pone en el trasfondo de la actual problemática socio-política. El gran economista y Premio Nacional de Ciencias Políticas, Aníbal Pinto, acuñó la teoría, ahora convertida en clásica, que el desarrollo de la sociedad chilena se había caracterizado históricamente por una gran dinámica y densidad de la vida político-institucional contrastadas con el esmirriado o débil crecimiento económico. La última década ha revertido esta situación y lo que puede apreciarse es una fuerte dinámica de crecimiento (no necesariamente desarrollo) económico contrastada con la debilidad, rigidez o retraso del sistema político-institucional en todos los planos de la vida social. Baste recordar que en este país de "alta modernidad" no hay ley de divorcio, las leyes laborales impiden la negociación colectiva y la acción del movimiento de trabajadores, el sistema de descentralización y gobiernos regionales, así como la legislación sobre municipalidades es extremadamente deficiente, la institucionalidad para preservar y desarrollar el medio ambiente como el patrimonio cultural son muy débiles, la Constitución está llena de enclaves autoritarios heredados, etc.

Así, el sistema económico, durante este siglo demasiado subordinado a la política, no sólo se independiza enteramente de la cultura, el Estado y la organización social y política del país, sino que tiende a imponer sobre ellos sus criterios, que en este caso son los del mercado y la autorregulación. Por lo que el gran problema del país, el gran salto adelante, ya no es económico, sino social, cultural, político e institucional. Lo que significa que el desafío básico es aumentar la capacidad de la sociedad, tanto actores sociales y Estado, de intervenir sobre sí misma y no dejar que las fuerzas naturales de los mercados (eufemismo para referirse a los poderes que operan en él) determinen su marcha. La reconstrucción y fortalecimiento del Estado, el sistema político, las instituciones sociales, culturales y educativas, etc., pasan a ser la primera prioridad. El sistema de educación superior es parte de este sub-desarrollo institucional y cultural y su transformación es entonces de absoluta prioridad.

En todo ámbito de la vida social donde Estado y actores sociales eran fuertes y fueron desarticulados por el autoritarismo

y los principios de mercado, siendo éstos incapaces de resolver los problemas ahí existentes y agravándolos, se han producido conflictos sociales importantes durante el segundo gobierno de la Concertación. Por razones obvias, en todos ellos la articulación y conducción política iniciales, sólo puede ser hecha por sectores o partidos de izquierda no participantes en el Gobierno, lo que explica el papel protagónico en el momento de desencadenamiento del conflicto de dirigentes o militantes del Partido Comunista. El carácter de estos conflictos y de los movimientos que participan en ellos es básicamente reactivo y defensivo, demandando a través de una movilización que puede ser paro, huelga o toma, a la vez ciertas cuestiones reivindicativas y la intervención activa del Estado.

En todos los casos de este tipo de movilizaciones en los dos últimos años, la reacción inicial del gobierno refleja la carencia de un concepto, visión o política coherente respecto del ámbito en que éste se produce. Ella consiste en negarle su validez y atribuirle sólo móviles políticos, rechazando la negociación. La respuesta del movimiento es aumentar la movilización identificando los contenidos de la demanda con el tipo de movilización. A ello sigue una intervención de las autoridades económicas de Gobierno que se presenta como una propuesta última y definitiva, lo que, por ser inaceptable para los dirigentes del movimiento, mantiene la movilización, obligando a una larga negociación que se termina con concesiones mutuas que ponen fin al conflicto, sin nunca resolver el problema de fondo. En el camino, otros actores sociales van aprendiendo que ésta es la pauta convencional de manejo de conflictos sociales en este periodo y que a ella habrá que acudir cuando sea posible u oportuno.

La situación universitaria de 1997 reproduce, con sus propias especificidades, los rasgos que caracterizan la problemática histórica de la sociedad chilena y el modo cómo se constituyen y desarrollan los conflictos sociales.

La dinámica de los actores involucrados

Todo lo dicho hasta aquí cristaliza confusamente en el desencadenamiento del conflicto y las movilizaciones que sacudieron a las universidades durante varios meses. Ninguno de

estos componentes puede ser dejado de lado en el momento del análisis, pero todos ellos son re-elaborados por la dinámica propia del conflicto mismo y de sus actores protagónicos.

Siempre los grandes conflictos universitarios son desencadenados por los movimientos estudiantiles y luego de su resolución, la reconstrucción del sistema encuentra a otros interlocutores protagónicos, pasando el movimiento desencadenante a un segundo lugar. No es de extrañar, entonces, que sea el movimiento estudiantil, en particular, la Federación de Estudiantes de Chile, FECH, dirigida por un carismático dirigente comunista, la que desencadenó el conflicto en torno a la crisis de la educación superior. Tampoco que el primer campo de expresión de dicho conflicto haya sido la Universidad de Chile y luego las Universidades estatales, por ser éstas las más afectadas por el actual modelo de educación superior y la ausencia de un proyecto alternativo. Además de su carácter desencadenante, hay otras dos características genéricas de todo movimiento estudiantil que cabe considerar. Por un lado, por la naturaleza de la condición pasajera de los estudiantes, se trata del movimiento social con menor memoria histórica y que tiende a reproducir en cada época las mismas temáticas, con significados diferentes, y los mismos ritos de movilización. Por otro lado, su lenguaje o discurso identifica y confunde los problemas de método y estrategia con los problemas y propuestas de contenido, haciendo ver una conexión o causalidad inevitable entre ellos, dándole a ambos una connotación utópica y relativamente mesiánica.

Pero hay algunos rasgos que diferencian este movimiento estudiantil de otros del pasado, ya sea de los sesenta o de las luchas contra la intervención de las Universidades bajo el régimen militar. Así, ya no puede identificarse a los estudiantes universitarios con toda la juventud chilena ni tampoco con una elite dirigente que tiene asegurado su puesto en la política o la economía del país una vez egresados. Tampoco son los parias perseguidos de los ochenta cuyo destino es la expulsión, la represión, la cárcel o el exilio. Ni triunfadores seguros en un mundo en que todo cambia y en un proceso del que la Universidad es parte privilegiada, ni perseguidos con futuro cerrado que deben concentrarse en terminar con un poder que los oprime. Más bien, conglomerados juveniles heterogéneos con el destino incierto de un diploma que para algunos es garantía de éxito, para otros es una condena a la

marginalidad y para la mayoría es solo un momento de la lucha interminable para no ser excluidos del modelo social. De ahí las contradicciones internas del movimiento, porque no todos comparten la misma situación y los mismos intereses que dependen del nivel e institución en que se está, que lo obligan a un discurso genérico y a mantener formas movilizadoras, como las tomas, que no guardan ninguna coherencia con lo que se solicita. El movimiento estudiantil de los noventa es sobre todo la expresión de un malestar, no enteramente definido, de una época y una generación, de una perplejidad de la condición juvenil en una sociedad de jaguares sin identidad y autocomplacientes y de mercados que exigen competir para ser alguien. Es una reacción ante la falta de sentido y la ausencia de causas por las que vivir y jugarse. Con poca retórica y pocas ideas sustantivas, es más una búsqueda, no exenta de rasgos conservadores, que una afirmación. Su discurso es una petición y no una oferta ideológica como en el pasado. Ninguna certeza de contenido ni proyecto, sino demanda de ser tomado en cuenta. Sabe que su conducción sólo puede subsistir prolongando el momento de ruptura y la movilización, porque en el momento de la resolución será el grano que muere y reemplazado por otro. De ahí su incapacidad para darse cuenta de sus triunfos y la necesidad de prolongar indefinidamente la movilización y las tomas que pasan a ser un fin en sí, el movimiento mismo y no un medio para obtener determinados objetivos. De ahí su riesgo de descomposición interna y de una pura defensa estamental de porcentajes, recursos y mecanismos.

Si se examinan las demandas planteadas por los estudiantes que desencadenaron el conflicto, más que ideas o proyecto que no los hay como en otras épocas, más que una propuesta precisa, la que se reduce fundamentalmente a la reivindicación socio-económica, ellas se resumen en dos grandes cuestiones que son, sobre todo, de planteamiento del problema y de método. Por un lado, necesidad de un debate participativo en torno al sentido de la Universidad, el marco normativo y la política de desarrollo, sin que haya un pronunciamiento sustantivo sobre estos temas. Por otro lado, recursos. Dicho de otra manera, demanda de debate e intervención activa del Estado. Ello, por supuesto, va acompañado en un primer momento de un planteamiento de poder, el que sí es bien preciso, como pedir la renuncia del Rector como "condición necesaria para la resolución de la crisis", tomarse autoritariamente

los locales más allá del paro, y solicitar una fórmula de resolución con alta participación estudiantil (en este sentido, sí, hay que aclarar que no hubo propiamente propuesta de co-gobierno).

En este primer momento, tanto las autoridades de gobierno como las universitarias contestan ritualmente que no hay crisis, que no se aceptan las exigencias de cambio de autoridad ni las medidas de fuerza y que el conflicto tiene solo una raíz política. Es decir, quedan entrampados en la misma estrategia estudiantil, que es confundir el problema de contenido con una solución y una estrategia de poder, y desconocen la naturaleza de la crisis, en vez de separar ambas dimensiones aceptando el problema de fondo y rechazando la deslegitimación de las autoridades. Al meter, igual que los estudiantes, todo en un mismo saco, obligan a éstos a radicalizar su movimiento y a confirmar su visión que es necesario un cambio de autoridad. La continuación y expansión del conflicto a las universidades estatales muestra la validez del planteamiento de fondo de los estudiantes respecto de la crisis y obliga tanto a las autoridades de gobierno como universitarias a reconocer la necesidad de debate y negociación, lo que lleva a los estudiantes a abandonar su demanda de renuncia del Rector y a concentrarse en su propuesta de participación en los debates y propuestas en torno al futuro de la Universidad estatal. La autoridad universitaria debió ceder en todo lo que no fuera el desconocimiento de su legitimidad y buscó que parte del costo de la crisis sea asumido por el gobierno. Este siguió el patrón que lo ha caracterizado en los conflictos de estos años, reaccionando, con buena voluntad pero tardíamente, con entrega de recursos que afirmaba no tener y con soluciones parciales a una situación que su falta de concepto y política coherente coadyuvó a originar. El movimiento estudiantil triunfó en lo medular en la medida que la crisis y el debate para resolverla fueron reconocidos y en la medida que se negoció con él estos aspectos. Su demora en abandonar el momento de ruptura o movilización y prolongar injustificadamente las tomas, movilizaciones y medidas de fuerza, se explican sólo por el interés político de no perder su fuerza y conducción.

Entretanto, pareció haberse despertado la comunidad académica que, salvo importantes excepciones, osciló entre el polo de la indignidad obsecuente que "agradece" a los estudiantes lo que como académicos no hicieron y acepta todo sin propuesta

ética o política propia y sin crítica a las formas autoritarias del movimiento estudiantil que les impedía ingresar a sus lugares de trabajo y sin propuesta ética o política autónoma, y el polo oportunista que cambia su silencio o discurso conformista por la búsqueda de ventajas particulares. Pero esto también ha sido siempre así. El momento de los académicos no es el de la ruptura, sino el que sucede al de los estudiantes, es decir, cuando se debe recoger los frutos del triunfo estudiantil para intentar institucionalizar una reforma del sistema que no puede hacerse sin ellos. Habrá que ver si aprovechan dicho momento sólo para exigir recursos sin duda necesarios o también para enfrentar el problema de su calidad y excelencia académica soslayado hasta ahora.

La solución parcial del conflicto

El conflicto universitario en su dimensión más aguda fue solucionado, al interior de los establecimientos, a través del establecimiento de un sistema de debates y claustros en distintos niveles y que involucraban a estudiantes, académicos y funcionarios, los que se prolongaron hasta comienzos de 1998 y, en algunos casos, culminar con plebiscitos o referéndum. Sin duda el aspecto catártico de estos debates y la posibilidad de expresarse son de enorme importancia. Pero no hay que confundir un modo de resolución de conflictos con una verdadera solución a los problemas de fondo. No parece que tales claustros y los mecanismos establecidos puedan resolver los problemas y dilemas que afectan tanto a la idea de Universidad como a la estructura de la educación superior chilena como al sentido y estructura de cada institución universitaria. En relación al Estado y la comunidad nacional, el conflicto se resolvió con la promesa de nuevos recursos y algunos cambios normativos e institucionales, a mi juicio, menores, pero que mejoran la precariedad de la situación de las Universidades estatales.

Dicho de otra manera, la refundación del sistema de educación superior y de las instituciones universitarias chilenas y la redefinición de la responsabilidad del Estado y de las propias comunidades académicas, están aún muy lejos de implementarse. Y el modo como se resolvió el conflicto inmediato puede ser un

paso tanto para avanzar en ese sentido como para postergar dicha refundación y redefinición necesarias e inevitables.

